



LUNA GÁMEZ/EL PAÍS

Racismo estructural permea el abordaje de la pandemia

Los pueblos indígenas de Venezuela en tiempos de COVID-19

Minerva Vitti Rodríguez*

Se presenta un breve análisis de la situación de los pueblos indígenas ante la pandemia; una entrevista al antropólogo Aimé Tillett donde nos adentramos en el reto multidisciplinario e interinstitucional del abordaje de la salud indígena en Venezuela y una crónica sobre Blanca y los indígenas del pueblo pemón que, en medio de la adversidad, siguen criando y cuidando la vida en *pataa* (tierra) a través de la producción de sus propios alimentos

Algunos miembros de las comunidades indican que en estas últimas semanas (mayo 2020) han fallecido muchos indígenas warao con síntomas de fiebre, gripe, dolor de cabeza, dolor de pecho e inflamación de la garganta, en el municipio Antonio Díaz, del estado Delta Amacuro...



MINERVA VITTI

En medio de la pandemia de la COVID-19 surgen “fantasías no-indígenas” que aseguran que los pueblos originarios tienen más posibilidades para sobrevivir ante un colapso de la economía mundial, porque cuentan con el manejo de los bienes naturales, el aislamiento en sus comunidades y la medicina ancestral.

Sin duda, estas afirmaciones serían completamente ciertas si los pueblos indígenas no estuviesen amenazados por los modelos extractivistas, que depredan e invaden sus territorios ancestrales, lo cual limita su acceso a los bienes naturales; y por la discriminación histórica para que puedan acceder a las políticas públicas interculturales, especialmente a los servicios sanitarios, que hace que esta población tenga los peores indicadores de salud del continente latinoamericano.

Lo anterior, incide de forma negativa en los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas, convirtiéndolos en una de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, donde no solo está en riesgo el cuerpo físico, sino

todo el conocimiento ancestral de un pueblo.

Luego de tres meses de haberse decretado el estado de alarma constitucional debido a la COVID-19 (17 de marzo de 2020), ni el Ministerio del Poder Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela, ni la Dirección de Salud Indígena, han publicado el protocolo para la prevención, contención de la infección y control de la enfermedad COVID-19 para pueblos y comunidades indígenas.

Hasta el 25 de junio de 2020 se han registrado 136 casos de COVID-19 en la población indígena de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Amazonas 9 casos, 8 en San Carlos de Río Negro de la etnia yeral y 1 en Maroa de la etnia curripaco, Bolívar 126 casos, en las localidades de San Antonio de Morichal, Wara, Waramasen y Manakiare del municipio Gran Sabana de la etnia pemón. Delta Amacuro, 1 caso, del municipio Tucupita, de la etnia warao.¹

Algunos miembros de las comunidades indican que en estas últimas semanas (mayo 2020) han fallecido muchos

La falta de alimentos ha sido uno de los principales reclamos de los indígenas. Las comunidades más apartadas de los centros poblados son las más afectadas. Se han registrado protestas de los wayuu, en La Guajira, con varios heridos; y documentado historias de warao que navegan durante días, con sus curiaras y remos, para conseguir un saco de sal.

indígenas warao con síntomas de fiebre, gripe, dolor de cabeza, dolor de pecho e inflamación de la garganta, en el municipio Antonio Díaz, del estado Delta Amacuro; y también han informado sobre un brote de gripe en la comunidad pemón de San Antonio de Morichal, en el estado Bolívar.

No obstante, existen casos positivos de la COVID-19 en todos los estados con población indígena como Anzoátegui, Apure, Monagas, Bolívar, Sucre y Zulia, lo cual representa un riesgo para los pueblos originarios. Aunado a esto los venezolanos que están retornando al país ingresan por los estados fronterizos, son alojados en posadas y hoteles cercanos a las comunidades indígenas. Además, muchos de los pobladores de nuestras comunidades indígenas atraviesan las fronteras hacia Brasil y Colombia, a través de trochas y pasos fluviales, para proveerse de alimentos y otros productos de primera necesidad. Es el caso de la comunidad indígena de San Antonio de Morichal mencionada anteriormente, o de comunidades en los estados Amazonas, Apure y Zulia.

Se han reportado casos de la enfermedad entre migrantes indígenas venezolanos que huyeron del país debido a la emergencia humanitaria compleja. Esta es la situación de los yukpa, en Colombia; y los warao, en Brasil. Este último pueblo indígena ya tiene doce fallecidos y un número no determinado de contagiados por el secretismo que mantiene el gobierno de Brasil en cuanto a las cifras de la enfermedad en migrantes.

Un riesgo latente son los pueblos indígenas transfronterizos como los wayuu, en La Guajira venezolana y colombiana, y los yanomami, en el Amazonas venezolano y en el estado de Roraima en Brasil, ya que para ellos no existen las fronteras impuestas por los países. La primera muerte por COVID-19 registrada entre los yanomami de Brasil ocurrió el día 9 de abril en Boa Vista. El joven de 15 años de la comunidad Helepe pasó veintiún días con síntomas del nuevo coronavirus y, sin recibir la prueba adecuada para COVID-19, no resistió. Fue enterrado como indigente en el cementerio de Boa Vista sin el consentimiento de su familia, faltando el respeto a los rituales funerarios tradicionales yanomami².

El Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba apunta que los pueblos indígenas que se encuentran en aislamiento voluntario o contacto

inicial –que en Venezuela son tres, Joti, Yanomami y Uwottüja– requieren especial atención y que es “necesario tomar medidas de protección especial para salvaguardar sus hábitats de la entrada de agentes foráneos”.

Recordemos que la COVID-19 se contagia con mucha facilidad y puede ser mortal en personas con dolencias respiratorias severas. Observamos con preocupación que uno de los índices más altos en tuberculosis lo tiene el pueblo warao³ y que una de las principales causas de mortalidad infantil dentro de estos indígenas son los trastornos respiratorios⁴.

La falta de alimentos ha sido uno de los principales reclamos de los indígenas. Las comunidades más apartadas de los centros poblados son las más afectadas. Se han registrado protestas de los wayuu, en La Guajira, con varios heridos; y documentado historias de warao que navegan durante días, con sus curiaras y remos, para conseguir un saco de sal. Otro caso es el de los indígenas que se han quedado varados en las ciudades, sin recursos económicos para subsistir, y no han podido regresar a sus comunidades⁵.

La situación educativa es alarmante. Desde el inicio de este año escolar, los educadores han denunciado que la falta de combustible impide a los estudiantes llegar a los establecimientos educativos. La llegada de la pandemia agravó esta situación. El plan “Toda familia una escuela” del Ministerio de Educación es impracticable en las comunidades indígenas. En la mayoría de ellas no hay electricidad, no hay señal de televisión ni de Internet⁶.

La minería ilegal se ha exacerbado en los territorios indígenas. El 6 de mayo de 2020 un grupo de yekuanas fueron atacados con armas de fuego por los sindicatos en el río Caura, Bolívar. Hay casos de mineros sepultados por derrumbes en minas ilegales (hasta el 3 de mayo iban trece muertos). También se ha detectado la presencia de *garimpeiros* procedentes de Brasil en el Alto Orinoco (Amazonas) territorio ancestral del pueblo yanomami.